

Normas Jurídicas Aplicables en Operaciones de Paz:

Un Análisis Sobre su Complejidad

Dr. José Gabriel Paz

EL COMPLEJO marco jurídico-normativo aplicable a las Operaciones de Paz, puede constituirse en un problema adicional para las fuerzas participantes en la misión, si éstas carecen de los conocimientos legales suficientes.

Como consecuencia de hallarse inmersas en un complicado sistema legal, las cuestiones jurídicas relativas a la operación deberán ser analizadas en profundidad en cuanto su incidencia en todas sus instancias, desde el nivel político-estratégico, pasando por todos los pasos del proceso de planeamiento, hasta llegar a las normas que alcanzan al último individuo afectado al cumplimiento de la misión.

En muchos casos los abogados militares desempeñarán un rol decisivo en la determinación del sentido exacto de las leyes en relación a la operación, y frecuentemente deberán enfrentar situaciones en la que se necesitarán resoluciones rápidas y bien coordinadas, así como también se les exigirá una confiable respuesta legal ante normas carentes de la necesaria claridad, o insuficientes para resolver las difíciles situaciones que a menudo se plantean.

En otros casos, la tarea de los expertos legales consistirá en asesorar sobre la forma en que la Operaciones de Paz deberá hacer cumplir la ley en el ámbito de su competencia.

Las lecciones aprendidas en relación a la importancia que se le debe asignar a las cuestiones legales operacionales, han gravitado en la doctrina militar de los Estados Unidos, estableciéndose por tal razón normas expresas¹ que imponen el asesoramiento legal a los comandantes en todos los planes operacionales y órdenes, así como también otras disposiciones establecen el cumplimiento obligatorio de las leyes de la guerra, para la conducción de las operaciones militares y actividades relativas a los conflictos armados.

Dichas experiencias, también influenciaron en la doctrina de las “operaciones de paz”, donde se evidencia una clara percepción respecto al carácter crítico de la cuestión jurídica, y por tal motivo, este tema fue tomado en consideración al confeccionarse los manuales y reglamentos operacionales.

Así, el manual conjunto de “Otras operaciones militares”², en su capítulo IV, denominado “*Planning for military operations other than war*”, efectúa apreciaciones sobre los aspectos jurídicos en el planeamiento, analizando cuestiones relativas a los requerimientos legales, observando que en éste tipo de operaciones se pueden presentar cuestiones legales únicas, donde además de la pericia necesaria habitualmente en tareas de justicia militar, el personal que cumple tareas legales requiere experiencia en ésta clase de operaciones.

Advierte también que los comandantes deben asegurarse que el abogado militar o el asesor civil, tengan los recursos disponibles para responder a la variedad de normas legales y complejas regulaciones internacionales y operacionales que puedan presentarse durante la misión, haciendo asimismo una reseña³ sobre los temas en los que se requieren expertos legales, señalando entre otras, las cuestiones de refugiados, de ley fiscal, reclamos, reglas de enfrentamiento, operaciones psicológicas, asuntos civiles, ley internacional y acuerdos.

La doctrina militar norteamericana al confeccionar el manual de campaña “Operaciones de paz” hace apreciaciones específicas en cuanto a las consideraciones legales, y advierte que . . . *numerosas son las ramificaciones legales de las “operaciones de paz. Ellas pueden ser autorizadas por la ONU, por una organización regional, o por las Autoridades Nacionales de Mando. No importa quien la autorice, ellas están sujetas totalmente al derecho internacional y a las*

*leyes políticas internas de Estados Unidos. . .*⁴

Con la finalidad de satisfacer las necesidades operativas y educativas, el Ejército de los Estados Unidos dispuso la elaboración de un manual, denominado *Operational Law Handbook*⁵, el que se emplea como guía doctrinaria para el planeamiento y la ejecución de las operaciones, así como también es una herramienta básica en la pedagogía jurídica-militar, conteniendo un pormenorizado análisis de toda la legislación aplicable a los conflictos armados, fundamentalmente respecto a la ley internacional y operacional militar.

Pero no todas las doctrinas militares de los países que participan en *operaciones de paz*, han sido influidas de igual manera por las experiencias obtenidas o poseen similar criterio sobre la importancia del aspecto legal.

Por tal razón, sin dudas se hace necesario impulsar el concepto de que frente a la posibilidad de participar en tales operaciones, . . . *los comandantes y oficiales de estado mayor deban estudiar la ley detenidamente para determinar si la acción que están considerando es*

En muchos casos los abogados militares desempeñarán un rol decisivo en la determinación del sentido exacto de las leyes en relación a la operación, y frecuentemente deberán enfrentar situaciones en la que se necesitarán resoluciones rápidas y bien coordinadas, así como también se les exigirá una confiable respuesta legal ante normas carentes de la necesaria claridad, o insuficientes para resolver las difíciles situaciones que a menudo se plantean.

*adecuada. . . cuando llega el momento de la ejecución, . . . deban acatar las políticas prescritas por la ley y los reglamentos, y ejecutar sus operaciones de conformidad con éstas reglas. . .*⁶, con lo que el factor jurídico se convierte en un tamiz por el que sólo podrá pasar aquello que sea jurídicamente posible.

El omitir la consideración y el cumplimiento de las normas jurídicas en cualquier instancia, sea del nivel estratégico, operacional o táctico, puede traer aparejado —entre otras consecuencias no deseadas— el fracaso de la misión, y es por ello que su importancia adquiere dimensión estratégica.

Desde la óptica jurídica, en alguna medida las Operaciones de Paz, poseen un grado de complejidad superior en los niveles estratégico y operacional, respecto al resto de las operaciones convencionales, dado que se

deben considerar una mayor cantidad de normas.

El tratamiento del plexo jurídico-normativo en el planeamiento, deberá contemplar no sólo los procedimientos relacionados con las operaciones militares en tiempo de paz y de guerra, sino también aquellas normas que se relacionan con tratados, convenios y pactos internacionales suscriptos por cada uno de los países participantes, además de aquellas regulaciones especiales creadas a efecto de la operación, y en su caso las normas del país al que se acude.

A nivel táctico, se hará prevalecer un persistente adiestramiento en cuanto el cumplimiento de las leyes aplicables y de las reglas de enfrentamiento, así como también se deberá ejercer sobre cada hombre y el contingente en su conjunto, una infatigable tarea de supervisión y control.

En tal sentido, valen las expresiones del General Arnold, Comandante de las Fuerzas del Ejército de los EE.UU. durante la operación *Restore Hope* en Somalia, quien observa que . . . *las acciones militares en los niveles desde Compañía hacia abajo, suelen ser exactamente como las describen los manuales de campaña y de ejercicios, con ciertas limitaciones impuestas por las reglas de enfrentamiento. Los Comandantes que se desempeñan desde el nivel Batallón hacia arriba, comúnmente asumen más responsabilidades de las que les corresponden en operaciones convencionales, debido a las complejidades y a los muchos participantes inmiscuidos. . .*⁷

Lo expuesto es la observación de un factor determinante en relación a la cuestión planteada, por cuanto reviste particular importancia a la hora de establecer cuales son en cada etapa, las reglas jurídicas que rigen el accionar militar.

Normas Jurídicas de Aplicación a las “Operaciones de Paz”

En todos los niveles de la operación, resultará fundamental establecer de que manera y a través de que normas, se relaciona la misión con el marco jurídico de aplicación a las Operaciones de Paz.

En forma genérica se pueden distinguir tres grupos diferentes de normas jurídicas vinculadas a éste tipo de operaciones.

En un primer grupo se encuentra la ley internacional, caracterizada por los tratados, pactos y convenciones internacionales, y eventualmente el derecho consuetudinario. En éste grupo se deberá diferenciar la legislación de carácter permanente, de la transitoria, creada sólo para regular una determinada operación.

En un segundo grupo, se pueden ubicar las normas del derecho interno de país remitente, y finalmente en el tercer grupo se encuentran las normas del derecho interno del país receptor.

Tratados y Convenciones Internacionales Permanentes

Los tratados y convenciones internacionales, en términos generales, son acuerdos regidos por el derecho internacional, celebrados entre uno o varios Estados entre sí, o con una Organización Internacional o entre Organizaciones Internacionales, que obligan a los suscriptores a observar su cumplimiento.

Dentro de éste grupo, se pueden encontrar aquellos acuerdos que dan origen a los organismos internacionales, tales como la Carta de las Naciones Unidas, o los tratados y convenciones que con diverso alcance, buscan el establecimiento de la paz y la seguridad internacional.

En el análisis del marco legal de los tratados, pactos y convenciones, debe considerarse en primer lugar al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que contiene las normas que se orientan a la protección de la persona humana por su sola condición de tal.

También se deberán tener en cuenta aquellas normas que regulan protecciones especiales, en consideración a la particular condición que reviste el individuo en la sociedad, tal caso lo constituyen las normas que rigen especialmente los derechos de la mujer, del niño, etc.;

Se deben valorar asimismo, aquellos ordenamientos previstos para atender a la protección de las personas, en función de las circunstancias excepcionales que estuvieran atravesando, ubicándose dentro de ésta categoría el Derecho Internacional Humanitario.

Además de los tratados de cumplimiento obligatorio, pueden haber recomendaciones de Organizaciones Internacionales que por su importancia se podrán tener en cuenta, pero en todas las circunstancias se deberá considerar cuáles son las obligaciones que ha contraído cada país en el marco del derecho internacional, y de que manera se pueden relacionar con la operación ordenada.

Derechos Humanos

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tiene bajo su órbita la custodia del conjunto de principios y normas internacionales que se establecen con el fin de lograr el respeto y la garantía de los derechos de la persona humana,⁸ dentro de éste ámbito se hallan un amplio espectro de normas jurídicas.

Vale la pena recordar en que la conducta de los contingentes militares puestos a disposición de las Naciones Unidas, conforme lo establece el documento "Observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas", deben ajustarse siempre a las normas del derecho humanitario internacional y al derecho internacional de los derechos humanos,⁹ así como también las reglas de intervención

aplicables a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas deben contener referencias explícitas a esas obligaciones.¹⁰

Las bases del sistema jurídico regulatorio en la materia, se concentran en el "Pacto internacional de derechos civiles y políticos",¹¹ y el "Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales",¹² los primeros tratados internacionales globales y jurídicamente obligatorios en materia de derechos humanos, que constituyen junto con la "Declaración Universal de Derechos Humanos",¹³ el núcleo de la Carta Internacional de Derechos Humanos.

Se complementa el marco jurídico con una amplia variedad de normas, entre las que se cuentan la "Convención sobre imprescriptibilidad sobre crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad",¹⁴ "Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos",¹⁵ "Código de conducta para funcionarios

A nivel táctico, se hará prevalecer un persistente adiestramiento en cuanto el cumplimiento de las leyes aplicables y de las reglas de enfrentamiento, así como también se deberá ejercer sobre cada hombre y el contingente en su conjunto, una infatigable tarea de supervisión y control.

encargados de hacer cumplir la ley",¹⁶ todas normas que buscan amparar a la persona humana, preservando su dignidad.

En el marco continental, existen reglas que imponen el respeto a los derechos humanos, tales como las vigentes en el ámbito americano, originadas en la "Carta de la OEA", "Declaración americana de los derechos del hombre",¹⁷ "Convención americana sobre Derechos Humanos",¹⁸ entre otras.

Normas que Regulan Protecciones Especiales

Dentro de ésta clasificación se halla la "Convención de los Derechos del Niño",¹⁹ la "Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto",²⁰ así como otros documentos vinculados, tales como las resoluciones 2444 (XXIII) de 19 de diciembre de 1968, 2597 (XXIV) de 16 de diciembre de 1969 y 2674 (XXV) y 2675 (XXV) de 9 de diciembre de 1970, relativas al respeto de los derechos humanos y a los principios básicos para la protección de las poblaciones civiles en los conflictos armados, así como la resolución 1515 (XLVIII) del Consejo Económico y Social, de 28 de mayo de 1970, por la que solicita a la Asamblea General que se expida a través

de una declaración, sobre las cuestiones vinculadas a la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de guerra.

Por tal razón, la Asamblea General de las Naciones Unidas, tomando como base disposiciones pertinentes de los instrumentos de derecho internacional humanitario sobre la protección de la mujer y el niño en tiempos de paz y de guerra, dicta la “*Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado*”.²¹

La finalidad de dicha Declaración es proporcionar una protección especial a las mujeres y los niños, que forman parte de las poblaciones civiles en estado de emergencia o de conflicto armado, instando a todos sus Estados miembros a acatar esas medidas de protección, y ratifica la obligación de todos los países adherentes, al cumplimiento de las obligaciones asignadas por el Protocolo de Ginebra de 1925 y los Convenios de Ginebra de 1949, así como otros instrumentos de derecho internacional relativos al respeto del derecho humanitario y de los derechos humanos.

Derecho Internacional Humanitario

El Derecho Internacional Humanitario, se conceptúa como el conjunto de normas contenidas en tratados, e incluso derivadas de la costumbre, que regulan los derechos y obligaciones de los participantes en conflictos armados y la protección a las personas y bienes que pueden quedar afectadas por el conflicto,²² constituyendo un derecho de excepción, y que resulta de aplicación a las específicas condiciones de los conflictos armados. Se basa en los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra, y los dos Protocolos Adicionales a dichos Convenios —*aprobados el 8 de junio de 1977*— obligando a casi la totalidad de los miembros de la comunidad internacional a su cumplimiento.

Dicho marco jurídico resulta de absoluta aplicación a las fuerzas que realizan operaciones bajo el mando y control de las Naciones Unidas, puesto que tal como lo establece el Documento ST/SGB/1999/13 dictado por el Secretario General de las Naciones Unidas, . . . *los principios y normas fundamentales del derecho internacional humanitario. . . serán aplicables a las fuerzas de las Naciones Unidas cuando participen activamente en éstas como combatientes en situaciones de conflicto armado. . . serán también aplicables en acciones coercitivas o en operaciones de mantenimiento de la paz cuando esté permitido el uso de la fuerza en legítima defensa. . .*²³

El propósito de éste conjunto de reglas jurídicas, es evitar que tras la legítima finalidad de vencer al enemigo se inflijan sufrimientos, se causen heridas o se ocasionen

daños o destrucciones que no sean necesarios, y por lo tanto el uso de la violencia sólo es permitida en la medida que tenga la objetivo específico de dominar al enemigo, por lo que el derecho de los contendientes a elegir métodos y medios para hacer la guerra no es ilimitado.²⁴

En tal sentido, receptando ése principio, el Documento ST/SGB/1999/13, aclara . . . *la fuerza de las Naciones Unidas respetará las normas que prohíbe o restringen el uso de ciertas armas y métodos de combate en virtud de los instrumentos pertinentes del derecho internacional humanitario. Se incluye. . . la prohibición del uso de gases asfixiantes, venenosos o de otro tipo y los métodos de la guerra biológica; las balas que explotan, se expanden o se aplastan fácilmente en el cuerpo humano, y ciertos explosivos. Se prohíbe uso de ciertas armas convencionales, como las minas antipersonal de fragmentos indetectables, las trampas explosivas y las armas incendiarias.*

Este cuerpo de normas establece restricciones a las acciones en los conflictos armados, y fue creado teniendo en cuenta la necesidad de los beligerantes de poder utilizar todos los medios y métodos que racionalmente se requieren para derrotar al enemigo, y es por ello que la excusa de la *necesidad militar* no se puede invocar como justificación, puesto que tales normas que ya la han tenido en cuenta.

Es principio básico del Derecho Humanitario el que no se deben causar sufrimientos, heridas, destrucción o daños por motivos personales o como castigo, en consecuencia, se desprende del principio referido que entre los diversos métodos disponibles para alcanzar un objetivo militar legítimo, deben elegirse aquellos que causen menos sufrimientos, heridas, destrucción o daños.

Es también una exigencia legal, que se haga una distinción en todo momento entre población civil y combatientes y entre bienes de carácter civil y objetivos militares,²⁵ con lo que se procura que las operaciones se dirijan únicamente contra objetivos militares,²⁶ y tal concepto es congruente con la noción de que se puede vencer al enemigo mediante ataques exclusivamente a esos objetivos y de que, por lo tanto, no es necesario dirigir operaciones militares contra la población civil o contra los bienes civiles.

La protección del medio ambiente natural,²⁷ así como el patrimonio artístico y cultural es también objeto de este conjunto normativo.

La “Clasificación Tripartita”

Como correlato de lo antes señalado, se deberá asignar particular importancia a las normas provenientes de la clasificación tripartita²⁸ por la que se condenan los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.



Ejército Argentino

La brutalidad de estos delitos internacionales, que parecían haber quedado sepultados en Nuremberg, han resurgido en conflictos donde ha tomado intervención las Naciones Unidas, como en los casos de Ruanda o de la ex Yugoslavia, siendo por tal razón indispensable un profundo conocimiento de tales principios jurídicos por parte de quienes participan en las Operaciones de Paz, puesto que sus miembros son los funcionarios encargados de evitar que ocurran, y en su caso de detener la comisión de tales crímenes, así como capturar a sus autores para su juzgamiento.

Actualmente, a partir del establecimiento de la Corte Penal Internacional por el Estatuto de Roma,²⁹ los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, podrán caer bajo jurisdicción del Tribunal Internacional.

Los crímenes contra la paz, fueron definidos por la Carta del Tribunal de Nuremberg como el planeamiento, iniciación o conducción de una guerra de agresión o de una guerra en violación de los tratados internacionales, y en éstos delitos la responsabilidad por su comisión sólo incumbe a los dirigentes del Estado y no al soldado raso que participa en una guerra de agresión.³⁰

Por su parte, los crímenes de guerra están directamente ligados a la existencia de una situación de hostilidades declaradas entre los Estados de donde proceden

respectivamente los autores y las víctimas de los hechos, y se caracterizan por violaciones de las leyes o costumbres de guerra.

Los crímenes contra la paz, fueron definidos por la Carta del Tribunal de Nuremberg como el planeamiento, iniciación o conducción de una guerra de agresión o de una guerra en violación de los tratados internacionales, y en éstos delitos la responsabilidad por su comisión sólo incumbe a los dirigentes del Estado y no al soldado raso que participa en una guerra de agresión.

Los crímenes de lesa humanidad son los que constituyen un atentado a los derechos esenciales de la persona humana cometido en condiciones particularmente atroces e inhumanas, sin que corresponda distinguir si han sido perpetrados contra combatientes o contra poblaciones civiles, resultando su motivo principal de naturaleza política, racial o religiosa,³¹ y su acción se puede llevar a cabo a través del homicidio, exterminio,

sometimiento a la esclavitud, deportación, y cualquier otro acto inhumano cometido contra cualquier población civil, antes o durante la guerra, o persecuciones por razones políticas, raciales o religiosas ejecución de algún plan político, con independencia de si constituye o no una violación de la legislación interna del país en donde se cometa.

Se configuran los crímenes de lesa humanidad —aún cuando éstos pudieran calificarse como de crímenes de guerra— cuando se realizan actos inhumanos y persecuciones que, en nombre de un Estado que practica una política de hegemonía política, son cometidos sistemáticamente contra personas en razón de pertenecer éstas a una colectividad racial o religiosa o contra los adversarios de la política de dicho Estado.

Un mismo hecho puede constituir a la vez un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad, ya que en ése caso revela a la vez una violación de los usos y costumbres de la guerra y un atentado contra los derechos esenciales de la personalidad humana cometida en condiciones particularmente atroces.

De la vandálica e inhumana comisión de hechos político-delictivos que conmovieron al orbe durante la Segunda Guerra Mundial, surgió la necesidad de crear el término *genocidio*, para poder designar actos tan atroces y en una escala desconocida hasta entonces.

El genocidio es un delito contra la humanidad que consiste en cumplir con el propósito premeditado de destruir total o parcialmente un grupo humano determinado, es . . . *negar el derecho a la existencia de grupos humanos completos, una negación que choca con la conciencia del género humano y provoca grandes pérdidas para la humanidad, y que se opone a la ley moral.* . . .³²

La “Convención sobre la prevención y sanción del delito de genocidio”³³ reafirmó la idea que el genocidio es un crimen contemplado por el derecho internacional, e invitó a los países signatarios a sancionar la legislación que fuese necesaria para prevenir y castigar este tipo de crimen.

Dicha Convención, obliga a todos los Estados partes, a emplear todas las medidas que sean necesarias para llevar ante la justicia a los criminales responsables de las atrocidades cometidas durante los conflictos armados, y en consecuencia ésta responsabilidad se extiende también a las fuerzas que se desempeñan en operaciones de paz en cuanto deben propiciar la detención de los autores del delito para su juzgamiento.

Bases Jurídicas del Sistema de las Naciones Unidas

El establecimiento de la seguridad colectiva. A nivel del Derecho Internacional, las más importantes bases jurídicas que justifican la realización de las

operaciones de paz, se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas, donde se establece la estructura funcional y sus misiones, así como en los Capítulos VI, VII y VIII, se esbozan los distintos mecanismos *para establecer o mantener* la paz y la seguridad, y la participación de los órganos de dicha estructura en tales procesos.

Si bien tal como lo establece el artículo 1 de dicha Carta, es el objeto de la Organización el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional,³⁴ corresponde al Consejo de Seguridad la responsabilidad orgánica de materializar el cumplimiento de tal propósito frente a cualquier amenaza,³⁵ mientras que al Secretario General³⁶ —a través del órgano administrativo correspondiente— le cabe la tarea de planificar, conducir y proporcionar apoyo financiero a todas las operaciones de campaña patrocinadas por la ONU, en particular aquellas relacionadas con el mantenimiento de la paz.

El concepto de *operaciones de paz*, ha ido cambiando a través del tiempo, y puede decirse que se trata de un término genérico que abarca la realización de numerosas actividades orientadas hacia el fin de crear y mantener las condiciones para el restablecimiento de la paz, contando como herramientas para tal fin a las medidas de apoyo a la diplomacia, el mantenimiento de la paz y la imposición de la paz.

Las acciones previstas por la Carta de las Naciones Unidas para el establecimiento de la paz y la seguridad, han sido objeto de un más preciso detalle a partir del documento denominado *An Agenda for Peace*,³⁷ originado por el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, quien define sus diferentes instrumentos, diferenciando las *actividades de prevención* —como el caso de la *diplomacia preventiva*— de las actividades de *resolución de conflictos* —como la *concertación de la paz, mantenimiento de la paz e imposición de la paz*— de las “*medidas de consolidación*” tales como la *construcción de la paz*.

El Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, establece en sus artículos 33 a 38, el marco jurídico para el arreglo pacífico de controversias, como medio idóneo para solucionar en forma pacífica los conflictos que puedan poner en peligro la paz y la seguridad internacionales, y sitúa en el Consejo de Seguridad la responsabilidad de recomendar los procedimientos o métodos a seguir frente a una controversia, debiendo tener siempre en consideración para cualquier solución, las vías que las mismas partes hayan adoptado para la solución de las desavenencias.

Dentro de éste Capítulo se encuentran la *diplomacia preventiva* que es el conjunto de medidas destinadas a evitar que surjan controversias entre dos o más partes, a evitar que las controversias existentes se transformen en conflictos y evitar que éstos, si ocurren, se extiendan.

Tales soluciones podrán consistir en medidas de confianza mutua, de alerta temprana, el despliegue preventivo y la creación de zonas desmilitarizadas.

Las medidas destinadas al “*establecimiento de la paz*”, son las acciones orientadas a lograr que las partes hostiles lleguen a un acuerdo, fundamentalmente por medios pacíficos.

En cuanto al “*mantenimiento de la paz*”, consiste en el despliegue de una presencia de las Naciones Unidas en el terreno, con el consentimiento de todas las partes interesadas y, que además de la participación de personal militar o policial de las Naciones Unidas se incluye personal civil.

La “*consolidación de la paz*”, representa un conjunto de actividades destinadas a individualizar y fortalecer estructuras que tiendan a robustecer y consolidar la paz a fin de evitar una reanudación del conflicto, y por lo general es aplicable post-conflicto.

El Capítulo VII, establece el marco jurídico en el que las herramientas a emplear, conllevan básicamente el uso del instrumento militar para la imposición del cumplimiento de resoluciones y/o sanciones dispuestas por las Naciones Unidas, o para restaurar la paz.

La aplicación de las acciones militares en las medidas de imposición, en muchos aspectos no difieren de las propias de la guerra, puesto que deberá estar en aptitud para el sostenimiento de la capacidad operacional por extensos períodos de tiempo, pueden involucrar masivamente a los elementos terrestres, aéreos y marítimos, y podrá contar con el empleo de armas pesadas como elemento disuasivo.

En cuanto a la participación de las Organizaciones de alcance regional en “*operaciones de paz*”, a través del Capítulo VIII, adquieren la posibilidad de constituirse en gestoras de las acciones para el establecimiento de la paz en el área de su competencia, en la medida que se realicen conforme el propósito y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, pudiendo conducir dichas operaciones con todos su alcances a partir de la aprobación de las mismas por el Consejo de Seguridad.

Tratados y Convenciones Internacionales Transitorios

Estas son las normas que se relacionan en forma directa con cada “*operación de paz*”.

Se crean exclusivamente con el fin de regular jurídicamente una operación en particular, siendo por



IFOR on IFOF/Steven Gordon

Un especialista forense integrante de la organización Médicos por los Derechos Humanos se halla sentado en la cima de una tumba donde se encuentran los desechos humanos de varias personas, cerca de Srebrenica. Las pruebas recobradas por él serán presentadas al Tribunal Internacional de la Haya.

tanto únicamente de aplicación sólo a la operación para la que fue creada.

Dentro de éste sistema de normas se encuentran el “*mandato*”, los “*términos de referencia*”, el “*acuerdo del estado de la fuerza*”, y las “*reglas de enfrentamiento*”, existiendo a su vez una numerosa cantidad de normas de carácter reglamentario tales como los “*Reglamentos de las Naciones Unidas*”, y órdenes operativas como la “*Directiva del Comandante de la Fuerza*”.

Mandato

El mandato es la norma jurídica que da origen y otorga legitimidad a cada operación.

Se trata de una resolución aprobada por el órgano competente de una organización internacional, en la que en términos generales se definen los fines de la misión

a desarrollar, que en el caso de las Naciones Unidas, es dictado por el Consejo de Seguridad.³⁸

En los casos en los que no se traten de operaciones ejecutadas en el marco de las Naciones Unidas, se podrán originar en tratados o acuerdos que surjan de seno de otras organizaciones internacionales, sean del marco continental o regional, y su contenido será similar al que aquí se analiza.

El mandato debe ser claro y preciso, debiendo encontrarse expresado el objetivo político-estratégico, el interés de la comunidad internacional respecto de la operación, y una descripción del estado final deseado, entendiendo por tal las condiciones que deben imperar al finalizar la misión, de conformidad con el objetivo fijado.

Debe advertirse que . . . *un objetivo final, garantiza a los comandantes militares un claro entendimiento de cuál es el propósito y establece metas claras a fin de alcanzar el objetivo.* . . .³⁹ por lo que es necesario que se enuncie con absoluta precisión.

También deben surgir del texto del mandato las funciones y responsabilidades más esenciales para el cumplimiento de la misión, encontrándose en él, el establecimiento de los funcionarios a cargo de la misión, los conceptos que permitirán concebir las reglas de enfrentamiento, establecer los recursos de personal y financieros con los que contará la operación, la protección de la fuerza, la duración de la operación, la forma de establecer las relaciones con los bandos beligerantes, las relaciones con otras agencias u organismos internacionales así como con las organizaciones no gubernamentales u organizaciones privadas de voluntarios.

Sin embargo, es una crítica constante⁴⁰ que . . . *no siempre se aclaran la misión y el estado final deseado al término de una operación, situación que exige un cuidadoso análisis y reafirmación de la misión, el establecimiento del estado final previsto y de las condiciones militares previstas para apoyarlo.* . . .⁴¹

Suele ser motivo de observación por parte de los comandantes, la circunstancia que el mandato “. . . *generalmente no define claramente los objetivos militares o establece objetivos políticos o tareas específicas para las fuerzas que exceden largamente los medios militares puestos a disposición de la misión.* . . . *en esta falta de coherencia entre los mandatos y los medios asignados a las misiones de paz debemos buscar el germen de muchas frustraciones y fracasos de Naciones Unidas, así como la razón de muchas divergencias y problemas entre los comandantes militares y las autoridades políticas que comandan las misiones en el terreno, o incluso con las autoridades de Naciones Unidas en Nueva York.* . . .⁴²

Cuando el mandato ha sido sancionado por el Consejo de Seguridad, se debe traducir a un plan operacional

con las actividades detalladas y específicas para cada uno de los componentes.

Esto también requerirá de la determinación de los presupuestos, de los requisitos logísticos, así como el establecimiento del respaldo administrativo requerido para la misión.

El plan operacional para la misión debe estar tan completo como sea posible, estableciendo la integración del componente militar, político, de policía, de ayuda humanitaria, así como también a las actividades relativas a derechos humanos, y de información.

Las tareas que no sean realizadas o que no hayan contemplado en esta etapa, incidirán negativamente en las actividades a desplegar una vez iniciada la misión.⁴³

Dado que a partir del mandato el comandante de la fuerza deberá deducir la misión, a fin de establecer el exacto alcance jurídico de las expresiones contenidas en el documento será necesario contar en forma permanente con el auxilio del abogado militar, para de tal modo ajustarlo a términos operacionales.

Términos de Referencia

Se denominan “*términos de referencia*” a las expresiones provenientes del documento emitido por el Secretario General de las Naciones Unidas, en el que se puntualizan aspectos derivados de la situación y del mandato, y del que surgen los conceptos al que deberá ajustar el comandante para el cumplimiento de la misión.

Se trata de un mensaje en el que se hace una descripción de la misión, estableciendo las relaciones de comando, la estructura organizacional, la estructura logística, los procedimientos financieros, los sistemas de coordinación y enlace, las responsabilidades de las unidades militares destacadas, y personal asignado a la operación.

Su importancia radica en que junto con el mandato, deberán ser adoptados por el comandante y adecuados en una orden de operaciones, por ello, cuanto más claro y detallado sea, más eficaz será para los fines requeridos.

Sin embargo, al igual que el Mandato, suelen ser poco explícitos e incluso deficientes para precisar adecuadamente los alcances de la misión.

Acuerdo sobre el Estado de la Fuerza (SOFA – SOMA)

Se trata de un acuerdo legal entre la ONU y los países miembros, que tiene su origen en el mandato, cuya finalidad consiste en establecer y delimitar las responsabilidades y la autoridad legal que tendrá la fuerza, así como también la determinación de las normas de aplicación, derechos, privilegios e inmunidades que



Departamento de Defensa

Tropas egipcias llegando a Somalia para proporcionar apoyo a las operaciones de la ONU en noviembre de 1993.

regirán al personal en su participación en la operación.

En la doctrina de los EE.UU. se lo conoce como *SOFA* (*Status of Force Agreement*), mientras que en las Naciones Unidas se lo suele denominar *SOMA* (*Status of Mission Agreement*)

Las partes que suscriben estos acuerdos pueden ser las Naciones Unidas, el “*Estado remitente*” o sea el que envía la fuerza, el “*Estado receptor*”, o sea aquel en cuyo territorio se llevará a cabo la operación; o un “*Estado de tránsito*” el que es distinto del Estado receptor y en cuyo territorio el personal de las Naciones Unidas y asociado o su equipo se encuentre temporariamente presente en relación con una operación a cumplir.

Es sin dudas voluntad de cada Estado desarrollar plenamente su potestad jurisdiccional a través de sus sistemas judiciales, y en tal sentido, tal potestad se debe extender tanto en el ámbito interno como en el internacional, en la medida que cada Estado es el responsable del orden público en su esfera de soberanía.

No obstante lo antes expresado, los Estados pueden realizar una restricción voluntaria a su soberanía, y concertar limitaciones a su jurisdicción mediante la celebración de tratados internacionales.

El Estado remitente necesita en todo tiempo y lugar, el ejercicio pleno de su jurisdicción sobre los elementos militares destacados para el cumplimiento de la operación, resultando de particular importancia la preservación del control a través de la natural cadena

... no siempre se aclaran la misión y el estado final deseado al término de una operación, situación que exige un cuidadoso análisis y reafirmación de la misión, el establecimiento del estado final previsto y de las condiciones militares previstas para aporarlo. . .

de mandos, el mantenimiento de la seguridad de la fuerza y su grado de alistamiento, y por sobre todas las cosas, el ejercicio de la disciplina sobre el personal de dicho país.

Por su lado el Estado receptor en base al interés jurisdiccional que posee sobre su territorio, pretenderá una irrestricta aplicación de la ley sobre ése ámbito espacial, alcanzando a las personas y bienes allí localizados, e igualmente intentará ejercer su jurisdicción

sobre las fuerzas afectadas a la operación sobre ése territorio, pese a que sus estructuras jurídicas normalmente habrán desaparecido a consecuencia del conflicto. Sin embargo, el . . . *Estado receptor invitó a la fuerza visitante para promover sus propios intereses de defensa, tendrá el interés de remover posibles obstáculos y confusiones que podrán impedir a la fuerza visitante de llevar a cabo su misión de la manera más eficaz posible. El país receptor y el país remitente comparten intereses de defensa mutuos. Si no los tuvieran, no enviaría tropas uno y no las recibiría el otro. Lo que se requiere es que armonicen los intereses jurisdiccionales.* . . .⁴⁴

Cuando las Fuerzas Armadas extranjeras arriban a un país en el carácter de aliados, o cuando sin ser aliados pero no fuerzas invasoras, llegan y establecen en ésa nación bases militares, navales o aéreas, los gobiernos respectivos —ya que es previsible una larga o, al menos, indefinida permanencia— conciertan acuerdos formales, como los ingleses *Allied Forces Act* de 1940 dictada durante la Segunda Guerra Mundial y *Visiting Forces Act* de 1952, a fines de establecer debidamente el tema de la jurisdicción aplicable a los contingentes extranjeros.⁴⁵

En lo referente a la jurisdicción penal, es frecuente que tratándose de tropas aliadas, dichas reglas se amplíen, instituyendo la competencia exclusiva de las autoridades militares extranjeras, para intervenir en cuestiones vinculadas al juzgamiento de los hechos delictivos que se les atribuyan a sus miembros, sin atender a la naturaleza del delito ni el lugar donde fuera cometido.

Entre otras cuestiones que pueden ser objeto de acuerdo, entre las Naciones Unidas y los Estados que contribuyen con personal y el equipo en las *operaciones de paz*, se pueden mencionar a los acuerdos *stand by*, que consisten en convenios por los que los Estados suscriptores mantienen fuerzas en pie de alistamiento a la espera de ser convocadas en breve tiempo, para un rápido cumplimiento de una misión.

En tal caso, a través de la suscripción de un *memorandum de entendimiento*, se especificarán los recursos a proporcionar, los datos o requisitos técnicos con respecto a contribuciones de cada Estado y del Organismo Internacional, los tiempos de reacción, y condiciones para el empleo.

Reglas de Enfrentamiento

Son directivas que establecen las circunstancias bajo las cuales las fuerzas pueden hacer uso de las armas.

Las reglas de enfrentamiento (también denominadas *reglas de empeñamiento*) son elaboradas por los asesores militares y jurídicos de los países que proveen de efectivos a la misión, y por tanto podrán ser diferentes para cada una de las fuerzas intervinientes.

Una vez aprobadas por el Consejo de Seguridad, se

convertirán en normas obligatorias para cada contingente, y por tanto su incumplimiento, pondrá en funcionamiento el sistema jurídico-militar del país remitente.

La claridad en las reglas de enfrentamiento, . . . *protegen al soldado, ayudan a cumplir la misión y protegen al Comandante de la crítica después que ocurren los hechos. Obviamente, para crear reglas útiles el abogado debe entender la misión, las armas y la situación táctica.* . . .⁴⁶

Sin dudas, la base de las reglas de enfrentamiento se encuentran en el principio de “razonabilidad”, el que guiará el criterio para establecer bajo que condiciones se podrá disponer el empleo de la fuerza.

En este caso, las tareas del comandante consistirán en determinar —*teniendo como base a la misión y la situación*— cuál será la limitación de los métodos y medios de empleo de las armas más apropiado, y que a su vez garantice la más completa protección de la fuerza.

El no emplear un adecuado criterio de razonabilidad, puede poner en peligro la operación por la falta de seguridad en perjuicio de la fuerza, tal como la situación dada . . . *en la intervención de Estados Unidos en la República Dominicana en el año 1965, por ejemplo, las reglas de empeñamiento les prohibían a las fuerzas estadounidenses contestar con fuego a aquellos que dispararan a ellos a menos que existiera el peligro concomitante de que el enemigo abrumara las posiciones estadounidenses.* . . . *durante los dos años de tensión anteriores a la operación Just Cause, las fuerzas estadounidenses en servicio de guardia tuvieron la obligación de desafiar verbalmente a cualquier intruso armado antes de cargar un cartucho o abrir fuego. Los oficiales de estado mayor, especialmente los de la Infantería de Marina que vivían diariamente con la memoria inoludible del bombardeo de Beirut, reclamaron que las reglas de empeñamiento implicaban una situación de peligro innecesaria para sus hombres.* . . .⁴⁷

Según la naturaleza de cada operación, serán las reglas que se establezcan, y la base para su estricto cumplimiento estará relacionado con el adiestramiento que el personal reciba, así como también a través del desarrollo de una permanente tarea de supervisión y control, pero es conveniente hacer notar que en todos los casos las reglas deberán ser compatibles con las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Previo a hacer uso de las armas —si las circunstancias lo permiten— se actuará con fines disuasivos, a través de medios eficaces para hacer saber en forma cierta que se va a proceder a abrir el fuego, empleando para ello signos inequívocos, frases de advertencia a través del uso del lenguaje local, e incluso haciendo uso de las armas de fuego con disparos al aire por encima de los elementos hostiles.



Departamento de Defensa

Una detonación de explosivos encontrados utilizando, en este caso, un circuito eléctrico. (Recuadro) Minas antitanques y antipersonales, encontradas en gran cantidad.

Y para . . . cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: a) ejercerán moderación y actuarán en proporción. . . al objetivo legítimo que se persiga, b) reducirán al mínimo los daños y lesiones, y respetarán y protegerán la vida humana. . .⁴⁸

La decisión de hacer uso de las armas de fuego, debe ser limitada, puesto que puede traer como consecuencia ser considerado como un comportamiento hostil por parte de la fuerza, y por tanto, constituirse en un factor perjudicial para el cumplimiento de la misión en los términos de su concepción.

En las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, la posibilidad de emplear las armas, es siempre restrictiva, pero la naturaleza de la misión puede hacer necesario su uso bajo ciertas condiciones.

En tal caso, resulta aclaratoria la norma denominada *Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley*⁴⁹ la que establece en su punto 9 . . . los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza

para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para

La decisión de hacer uso de las armas de fuego, debe ser limitada, puesto que puede traer como consecuencia ser considerado como un comportamiento hostil por parte de la fuerza, y por tanto, constituirse en un factor perjudicial para el cumplimiento de la misión en los términos de su concepción.

lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. . . , debiéndose señalar que las Naciones Unidas, ha establecido como norma el derecho a actuar en defensa propia, a través del artículo 21 de la *Convención sobre las Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado*.⁵⁰

El personal que cumple tareas bajo las Naciones Unidas, ha sido en numerosas oportunidades objeto

de ataques, secuestros y amenazas, y en tal sentido, la Asamblea General aprobó la resolución 47/28 de 25 de noviembre de 1992 (decisión 47/457 C del 8 de abril de 1993), en la que pedía al Secretario General que adoptase todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal de las Naciones Unidas, así como de los que participan en operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones de índole humanitaria.

Se hace notar a los países anfitriones que serán responsables de la seguridad de todo el personal de las Naciones Unidas que participa en operaciones de mantenimiento de la paz o que realiza otras actividades en su territorio.

Finalmente, por resolución 49/59 del 9 de diciembre de 1994, la Asamblea General aprobó la *Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el personal asociado*, por el que en base a los ataques sufridos por el personal en funciones para las Naciones Unidas, se dispuso adoptar medidas apropiadas y eficaces para prevenir los atentados, y para castigar a quienes los cometan.

Ley del País Remitente

Se debe tener en consideración cuáles son las normas que en el marco interno de cada país, autorizan la disposición de las Fuerzas Armadas en Operaciones de Paz, y cuáles será las normas nacionales de aplicación al contingente en el cumplimiento de la misión, correspondiendo advertir al respecto que hay tantos criterios como países participantes.

En la mayoría de los países, la base del sistema legal, reposa en una Constitución, en la que se establecen los resguardos a los derechos y garantías de los ciudadanos, así como las atribuciones y responsabilidades de los Poderes del Estado.

También la norma constitucional puede establecer la forma de control sobre las Fuerzas Armadas, así como permitir, limitar o prohibir la participación de las fuerzas militares en cada conflicto, según su naturaleza.

La Constitución asimismo puede establecer el procedimiento para el empleo de las Fuerzas Armadas, en los que podrá participar en forma exclusiva el Presidente o Primer Ministro en la decisión, en otros casos lo deberán decidir junto al Congreso, o, podrá ser atribución exclusiva del Congreso decidir tal circunstancia.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la circunstancia de ser miembro de las Naciones Unidas, en mayor o menor medida a vincula a los Estados en las decisiones que toma.

En tal sentido, las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad, deben ser observadas por todos los miembros de la Organización, y luego de superar las instancias legales internas de cada Estado

miembro, deberán disponer los medios para su efectiva implementación.

Las denominadas *leyes de Defensa, de Seguridad, o de las Fuerzas Armadas*, podrán contener directivas expresas respecto a éste tipo de operaciones, y en algunos países podrán existir leyes que en forma autónoma regulen la participación de las fuerzas en *operaciones de paz*.

En la Argentina, cuando las Fuerzas Armadas deben intervenir en cumplimiento de una obligación como miembro de las Naciones Unidas, se ha entendido que basta para ello un decreto del Poder Ejecutivo, ya que el Congreso al incorporar la *Carta de las Naciones Unidas* a través de una ley por la que se aprueba su adhesión, ha aceptado las obligaciones que de ella emanan, y por tanto es atribución del Presidente el propiciar el cumplimiento de tales obligaciones, a partir de las atribuciones que la Constitución le otorga como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, ha habido casos en los que el Congreso ha tomado intervención y ha resuelto su participación por ley, tal el caso de la intervención de las fuerzas argentinas en el Golfo.

En cuanto a la normativa relativa a las operaciones de paz, puede decirse que existe una carencia de normas apropiadas que regulen la participación en las mismas, y el tema se menciona en forma genérica en la ley 24.948, *Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas* en su artículo 6, en el que se establecen entre las modalidades en las que se deberá considerar el empleo del instrumento militar propio, el relativo a las operaciones en el marco de las Naciones Unidas.

Alemania, tenía restricciones estatutarias que le impedían su accionar, sin embargo, desde el 12 de julio de 1994, a través de un fallo de la Corte Constitucional que estableció la legalidad de las operaciones fuera de su territorio, participó en operaciones en el marco de la OTAN y las Naciones Unidas en los Balcanes.

Algunos países cuentan con leyes específicas que regulan las actividades que realizan con las Naciones Unidas.

Los Estados Unidos, en cuanto a la materia específica de las *operaciones de paz*, cuentan con la Directiva PDD25 de Mayo de 1994 que está orientada a fijar pautas respecto a la política exterior del país en dichas operaciones, completándose a través de la Directiva PDD56, que a partir de Mayo de 1997, institucionaliza las lecciones aprendidas en la materia, y avanza en las operaciones multidimensionales (contingencias complejas) con participación de una gran variedad de agencias.

También se cuenta con abundante material doctrinario,

tales como “*Otras Operaciones Militares*” (C520), o el manual FM 100-23 “*Operaciones de Paz*”.

En relación a la aplicación de las normas generales del país remitente a sus respectivas fuerzas en operaciones, el principio básico es que los integrantes de cada contingente se encuentran regulados por las leyes y reglamentos de su propio país, los que toman para sí el ejercicio del control y la aplicación de las medidas disciplinarias a través de los mandos naturales, y fuera de la cadena de mando establecida por las Naciones Unidas.

Este principio se encuentra expresamente enunciado en la norma ST/SGB/1999/13 en el que para el caso de violaciones al derecho internacional humanitario, se establece que los miembros del personal militar de una fuerza de las Naciones Unidas, serán enjuiciados en los tribunales de sus países de origen.⁵¹

Las normas legales del país remitente, regirán a su contingente en materia disciplinaria, penal, fiscal, presupuestaria, y administrativa, como si se encontraran en su país de origen.

En el caso de Argentina, y en relación a las normas de aplicación al contingente, que éstas se basan en la Constitución Nacional —Ley Suprema de la Nación— junto a determinados Tratados Internacionales, y luego se encuentran las Leyes generales, las Leyes y Reglamentos militares, el Código de Justicia Militar y Código de honor.

En los Estados Unidos, el sistema regulatorio militar está organizado en base a la Constitución de los Estados Unidos, las Leyes Federales y correlativamente existen normas de diversa naturaleza, tales como el Código Uniforme de Justicia Militar, Ordenes del Ejecutivo, Directivas del Departamento de Defensa, Directivas de las Fuerzas, Instrucciones del Comandante Local, así como el Manual de la Corte Marcial.

Ley del País Receptor

Si bien la aplicación de las normas del país receptor, resultan limitadas por los “*Acuerdos sobre el estado de la fuerza*”, que como se ha visto restringe la posibilidad de aplicar las normas del país sobre los contingentes, resulta necesario destacar que las fuerzas participantes de la misión, deberán respetarlas, aunque no les sea obligatorio su cumplimiento.

El documento ST/SGB/1999/13, establece que la obligación de respetar los principios y normas de los convenios generales relativos al comportamiento del personal militar de las fuerzas de las Naciones Unidas, serán aplicables a dicha fuerza aún en ausencia de un acuerdo sobre el estatuto de la fuerza.⁵²

El artículo 6 de la *Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal*

Asociado,⁵³ en cuanto la observancia de las leyes y reglamentos por parte de dicho personal, dispone el respeto de las leyes y reglamentos del Estado receptor y del Estado de tránsito.

Conclusiones

El cumplimiento de la misión en un ambiente operacional tan especial como el de las operaciones de paz, impone que toda la estructura militar a su servicio, adopte una mentalidad distinta a la que habitualmente predomina para las operaciones en la guerra.

Esto se ve reflejado profundamente en el marco de la educación militar, puesto que se requiere adecuar a aquel individuo y al componente militar en su totalidad, a una nueva situación en la que se requerirá desarrollar un nuevo conjunto de conocimientos y habilidades, y que además como fuera señalado, se verá sometido a una profusa normativa que tiene relación directa o indirecta con las operaciones de paz.

Lo expuesto es demostrativo que debe producirse un significativo cambio en la educación militar reorientando sus investigaciones y enseñanzas académicas, y en tal proceso se deberá atender con mayor profundidad al plano jurídico, puesto que como se ha visto posee una estrecha relación con todo el desarrollo de la operación.

Un mejor conocimiento de los aspectos jurídicos-normativos, permitirá la generación de un marco doctrinario ajustado a las exigencias operacionales, garantizará en sus estructuras un mejor cumplimiento de la misión conforme la ley de la guerra, las normas internas e internacionales, y cumplirá con las premisas impuestas por las Naciones Unidas, tal el caso del artículo 19 de la *Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado*,⁵⁴ que establece con claridad que . . . *los Estados partes, se comprometen a dar a la Convención la difusión más amplia posible, y, en particular, a incluir su estudio, así como el de las disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario, en sus programas de instrucción militar. . .*

Se deberá grabar en la conciencia de cada individuo participante de la Operación de Paz, que un eficiente cumplimiento de la misión sólo será posible, a través del apego a la ley, el pleno sometimiento a los ordenamientos jurídicos internos e internacionales, y una manifiesta voluntad de respeto y protección a la persona humana.

Para finalizar, corresponde hacer notar la contradictoria situación en la que se hallan países activamente participantes en tales operaciones, y que no poseen una regulación legal específica, lo que habla también

de una falta de preocupación por la cuestión en los ámbitos político-legislativo, a pesar que en muchos casos, la remisión de contingentes para participar en Operaciones

de Paz, se inserta en el marco de la política exterior de dichos países, ocupando un papel preponderante en sus relaciones internacionales. **MR**

NOTAS

1. Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Directiva 5100.77 del 10 de julio de 1979.
2. Publicación Conjunta 3-07 "Doctrina Conjunta para Operaciones Militares de No Guerra" 16 de julio de 1995.
3. *Ibid*, pág. 53, Figura IV-2.
4. FM 100-23, Manual de Campaña, "Operaciones de Paz", 1994, pág 3-29.
5. JA 422. "Operational Law Handbook", The Judge Advocate general's school. Ejército de los Estados Unidos, 1998.
6. Concepto de estabilidad y operaciones de apoyo. Plan de Estudio C520, "Otras operaciones militares", Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. Fuerte Leavenworth, 1997, pág.66.
7. Arnold, S.L. "Somalia: una operación de no guerra", *Military Review*, Edición Hispanoamericana, mayo-junio de 1994, pág.89.
8. Gros Espiell, Héctor. "Estudios sobre derechos humanos", Caracas, 1985; del mismo autor y con igual título, Madrid 1988.
9. Naciones Unidas, Secretaría General, "Observancia del Derecho Internacional Humanitario...", *Op. Cit*.
10. Naciones Unidas, "Respeto de las Disposiciones del Derecho Humanitario y de la Normativa." *Op. Cit*.
11. Naciones Unidas, Asamblea General, "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", Resolución 2200 A. (XXI), 16 de diciembre de 1966.
12. Naciones Unidas, Asamblea General, "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", Resolución 2200 (XXI), 16 de diciembre de 1966.
13. Naciones Unidas, Asamblea General, "Declaración Universal de Derechos Humanos", Resolución A/217 A-3, 10 de diciembre de 1948.
14. Naciones Unidas, Asamblea General, "Convención Sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa Humanidad", Resolución 2391 (XVIII), 26 de noviembre de 1968.
15. Naciones Unidas, Asamblea General, "Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", Resolución 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966.
16. Naciones Unidas, Asamblea General, "Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley", Resolución A/34/169, 17 de diciembre de 1979.
17. Resolución XXX de la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 2 de mayo de 1948.
18. Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 22 de noviembre de 1969.
19. Naciones Unidas, Asamblea General, "Convención sobre los derechos del niño", 20 de noviembre de 1989.
20. Naciones Unidas, Asamblea General, "Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado", A.G. res. 3318 (XXIX), 29 U.N. GAOR Supp. (No.31) pág. 146, ONU Doc. A/9631 (1974).
21. Naciones Unidas, Asamblea General, "Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado", *Op. Cit*.
22. Cerdá, Carlos Horacio, "Regulación Legal de las hostilidades", en Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Público, Montevideo, Uruguay, 1992.
23. Naciones Unidas, Secretaría General, "Observancia del Derecho Internacional Humanitario..." *Op. Cit*. Sección I. 1.1.
24. Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra, Artículo 35, Párrafo 1º, concordante con el Artículo 22 del Reglamento anexo al Convenio IV de La Haya.
25. Naciones Unidas, "Observancia de derecho internacional humanitario..." *Op. Cit*. Sección I. 1.1. Sección 5, Protección de la Población Civil, 5:1.
26. Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra, Artículo 48.
27. Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra, Artículo 35, inciso 3º.
28. Carta del Tribunal Militar Internacional – Acuerdo de Londres, 8 de agosto 1945.
29. Naciones Unidas, A/Conf. 183/9, 17 de julio de 1998.
30. Akehurst, Michael, "Introducción al Derecho Internacional", Alianza Editorial, 1979, pág.335.
31. Artículo 6, Carta del Tribunal Militar Internacional del 8 de agosto de 1945 "Los crímenes de Lesa Humanidad, es decir, homicidio, exterminio, reducción a la esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano- contra poblaciones civiles antes o durante la

guerra, o bien las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos."

32. Naciones Unidas, Asamblea General "Convención para la prevención y sanción del delito de Genocidio" Resolución 260 A (III), 9 de diciembre de 1948, 78 U.N.T.S. 277.
33. Naciones Unidas, Asamblea General "Convención para la prevención y sanción del delito de Genocidio", *Op. Cit*.
34. Artículo 1 "Los propósitos de las Naciones Unidas son: . . . 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz; y para suprimir actos de agresión y otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o los arreglos de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;..." Carta de las Naciones Unidas, Capítulo I.
35. Artículo 24 "...I. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa en nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad..." Carta de las Naciones Unidas, Capítulo V, El Consejo de Seguridad, Funciones y poderes.
36. Artículo 97 "... El Secretario General será el más alto funcionario de la Organización." Carta de las Naciones Unidas, Capítulo XV, La Secretaría.
37. Naciones Unidas, Asamblea General, "Una Agenda para la Paz" A/47/277-S/24111), 17 de junio de 1992.
38. Naciones Unidas, "Líneas Directivas Generales para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz", Departamento de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Capítulo 3, 24 pág.16.
39. Kearns, Darien L. "La necesidad de establecer criterios en las misiones de paz de las Naciones Unidas", *Military Review*, julio-agosto 1995, Edición Hispanoamericana, pág. 21.
40. Ahlquist, Leif, "Co-operation, Command and Control in UN peacekeeping Operations. A pilot study from the Swedish War College", Swedish War College, Acta Cl, pág. 114, 1996.
41. Arnold, S.L. *Op. Cit*, pág. 89
42. Zabala, Carlos María, "Relaciones entre los aspectos militares y políticos del establecimiento de la paz y de la construcción de la paz", Revista de la Escuela Superior de Guerra, enero-marzo 96, pág. 19.
43. Naciones Unidas, "Multidisciplinary peacekeeping: Lessons from recent experience", Lessons Learned Unit, Department of Peacekeeping Operations, diciembre de 1996, pág. 7.
44. Supervielle, Manuel y Lozano, Manuel Omar, "situación Legal de las Fuerzas Armadas en el exterior" *Military Review*, Edición Hispanoamericana, julio-agosto de 1995, pág. 41.
45. Podestá Costa, Luis, "Derecho Internacional Público" Tº 1, TEA, pág. 86/185.
46. Elliot, Wayne, "Los abogados militares van a la guerra", *Military Review*, Edición Hispanoamericana mayo-junio 1994, pág. 41.
47. Yates, Lawrence, "Operaciones de Estabilidad y Apoyo: Analogías, Patrones y Temas Repetidos" *Military Review*, Edición Hispanoamericana, enero-febrero de 1998.
48. Naciones Unidas, "Principios básicos. . .", *Op. Cit*. Punto 7.
49. Naciones Unidas, "Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", ONU doc. A/CONF. 144/28/Rev.1 pág.112 (1990).
50. Naciones Unidas, Asamblea General, "Convención sobre la seguridad del personal. . .", *Op. Cit*.
51. Naciones Unidas, Secretaría General, "Observancia del derecho Internacional humanitario. . .", *Op. Cit*.
52. Naciones Unidas, Secretaría General, "Observancia del derecho internacional humanitario. . .", *Op. Cit*.
53. Naciones Unidas, Asamblea General, "Convención sobre la seguridad del personal. . .", *Op. Cit*.
54. Naciones Unidas, Asamblea General, "Convención sobre la seguridad del personal. . .", *Op. Cit*.

El Dr. José Gabriel Paz, es argentino y abogado. Cumple funciones en el Ministerio de Defensa de su país como Asesor Jurídico de la Auditoría General de las Fuerzas Armadas. También se desempeña como Director de la "Cátedra de Estudios de la Defensa y la Seguridad" y Profesor de las materias "Geoestrategia", "Organismos Internacionales" y "Legislación, Política y Estrategia" en la Universidad del Salvador (Buenos Aires, Argentina). Actualmente participa del "Programa de Fellows" del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad (Western Hemispheric Institute for Security Cooperation - WHINSEC). Sus más recientes artículos en la revista Military Review, Edición hispanoamericana, han sido publicados en el número de mayo-junio de 2002 bajo el título "Definiendo el Objetivo de la Guerra: La Lucha contra el Fundamentalismo Islámico" y en el número de noviembre-diciembre bajo el título "La Coordinación entre las ONG/OI y las Fuerzas Armadas en las Operaciones de Paz: Salvando Diferencias Culturales".